



La ciudadanía y las licencias

El 96,8% de los chilenos considera que está mal o muy mal que funcionarios públicos viajen al extranjero mientras están con licencia médica. Así lo reveló la encuesta Chile Nos Habla, de la Universidad San Sebastián, tras conocerse el informe de la Contraloría General de la República que identificó más de 25 mil casos de este tipo entre 2023 y 2024.

Más allá del escándalo nacional, este tema adquiere una especial sensibilidad en regiones como Arica, donde no solo se detectaron casos en servicios públicos, sino que la Municipalidad de Arica aparece como el tercer organismo del país con mayor cantidad de casos. Una realidad que duele aún más en un territorio históricamente postergado, donde la ciudadanía espera con urgencia un Estado que funcione, que cuide los recursos y que no normalice los abusos.

Los resultados de la encuesta reflejan una profunda molestia, una sensación de abuso y una demanda clara por justicia. El 69,9% de los consultados exige el reembolso de

(44,9%), emprender acciones legales (41,7%) y aplicar sumarios administrativos (40,9%).

Pero quizás el dato más revelador –y más preocupante– es otro: un 58,4% de las personas cree que, pese a todo, no ocurrirá nada con los responsables. Esa percepción de impunidad socava la confianza en las instituciones y refuerza la idea de que el Estado funciona con reglas distintas para quienes lo administran.

La encuesta, más que una simple fotografía de la opinión pública, es un llamado de atención a las autoridades. La ciudadanía no está dispuesta a tolerar el mal uso de los recursos públicos, menos aún en un contexto de estrechez fiscal, listas de espera en salud y urgencias sociales que claman por atención. Cada peso mal utilizado representa una oportunidad perdida para quienes realmente necesitan al Estado.

“

El dato más preocupante de un estudio es que un 58,4% de las personas cree que, pese a todo, no ocurrirá nada con los responsables”.

los dineros percibidos durante esas licencias. Un 64,2% va más allá y pide la desvinculación de los funcionarios involucrados. Y una proporción importante también exige investigar a los profesionales de salud que emitieron estas licencias